

JUZGADO TREINTA CIVIL MUNICIPAL

Bogotá D.C., catorce (14) de enero de dos mil veintiuno (2021).

Expediente: 2020-00549.

Demandante: Grupo Al S. A. S.

Demandada: Alimentos Ahumados Kuervo S. A. S.

Estando la demanda al despacho para decidir sobre la viabilidad de dictar la orden de apremio, resulta necesario realizar las siguientes precisiones:

1. El artículo 422 del Código General del Proceso estipula que los juicios ejecutivos, a fin de que se pueda librar orden de apremio para aperturarlos, requieren de la existencia de «*obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él*» (subrayas propias, igual que todas las demás); es por lo propio que, tales, son litigios denominados «*como de “contradictorio diferido”, a consecuencia de que el demandado, contrario sensu a lo que acaece en otros trámites judiciales, trabada la litis, recibe el proceso con una condena a costas*» (CSJ STC, 27 ago. 2012, rad. 01795-00).

Por ello, en principio, al ser los títulos valores «*documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora*» (art. 619 del Código de Comercio), que basan su eficacia en «*una firma puesta*», además de «*su entrega con la intención de hacerlo negociable*» (art. 625 *ib.*), se considerar títulos ejecutivos viables para la promoción de un juicio de cobro.

Así, un cartular, al cumplir con las normas especiales de existencia y validez, contempladas en las leyes mercantiles, será también un «*título ejecutivo*» de acuerdo con el canon procesal en cita; siendo que, en este aspecto, la normatividad goza de válida armonía.

2. En tratándose puntualmente de facturas electrónicas, y si bien en línea de principio puede esgrimirse que, conforme al

Decreto 2242 de 2015 –*compilado por el Decreto 1625 de 2016 y aún vigente*–, corresponden a un «*documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios*» (definición incorporada en el artículo 2 de tal norma), lo cierto es que, por las características propias que en esa figura mercantil convergen, no es factible colegir que *per se* corresponden a un título ejecutivo.

Lo dicho porque, el Decreto 1074 de 2015 –*adicionado por el Decreto 1349 de 2016*– que se refiere, puntualmente, a la circulación de la factura como título valor, expone que solo tienen esa condición –*insístase, de título valor y, por ende, de título ejecutivo*– si se exhibe materialmente un «*título de cobro*», entendido este último, precisamente, como «*la representación documental de la factura electrónica como título valor, expedida por el registro, que podrá exigirse ejecutivamente mediante las acciones cambiarias incorporadas en el título valor electrónico, para hacer efectivo el derecho del tenedor legítimo*».

Luego, en términos sencillos, no es la «*factura electrónica*» la que debe mostrarse como habilitante para un cobro ejecutivo, sino el «*título de cobro*» que expide el registro, conforme así lo explica el evocado decreto:

ARTÍCULO 2.2.2.53.13. Cobro de la obligación al adquirente/pagador. Incumplida la obligación de pago por parte del adquirente/pagador al emisor o tenedor legítimo de la factura electrónica como título valor, este tendrá derecho a solicitar al registro la expedición de un título de cobro.

El título de cobro expedido por el registro contendrá la información de las personas que, conforme a la circulación de la factura electrónica como título valor, se obligaron al pago de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Comercio.

El registro estará habilitado para expedir un único título de cobro a favor del emisor o tenedor legítimo de la factura electrónica como título valor inscrito. La expedición del título de cobro impedirá la circulación de la factura electrónica como título valor.

El título de cobro tendrá un número único e irrepetible de identificación. En el título y en El registro se dejará constancia de la fecha y hora de su expedición y de su titular.

Ante el incumplimiento de la obligación de pago por parte del adquirente/pagador, el emisor de la factura electrónica como título valor que no la hubiese inscrito en el registro para permitir su circulación, podrá inscribirla en el mismo con el objeto de solicitar la expedición de un título de cobro que, teniendo el carácter de título ejecutivo, le permita hacer efectivo su derecho de acudir a su ejecución ante la jurisdicción a través de las acciones cambiarias incorporadas en el título valor electrónico.

De considerarlo pertinente, la autoridad judicial competente podrá solicitar al registro un certificado que permita verificar la autenticidad del título de cobro. [...] (Subrayas propias).

3. En el *sub judice* la parte ejecutante arrojó una réplica en formato digital (*pdf*) de las facturas BOG-603, BOG-645 y MED-1604, mas no adjuntó, como legalmente correspondía, cada uno de los «títulos de cobro» que eventualmente prestarían mérito ejecutivo en relación con esas «facturas»; de modo que, sin mayores elucubraciones al respecto, se colige que no hay mérito para exigir el cumplimiento de algún tipo de obligación a la luz del canon 422 del Código General del Proceso, ya citado, porque no se aportó al *dossier* el título ejecutivo que soporte la ejecución.

En razón de ello, no hay lugar a librar la orden de pago reclamada.

4. Ahora bien, si en gracia de discusión se dijera que, hoy por hoy, no es factible realizar el «registro» de que versa el Decreto 1074 de 2015, citado líneas arriba, debe tenerse en cuenta que en esa oportunidad se le encargó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o al tercero que ese contrate (ver numeral 1, artículo 2.2.2.53.2), pero que luego de la expedición de la Ley 2010 de 2019¹, le corresponde es a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN su administración.

Al efecto, nótese que el Decreto 358 y la Resolución 00042, ambos de 2020, expedidos por ese ente gubernamental, han hecho

¹ Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

lo propio para la existencia y aplicación de ese registro –*ahora denominado RADIAN*–; amén de que el Decreto 1074 de 2015 facultó al acreedor para efectuar esa inscripción, no desde la emisión de la factura sino a partir de su incumplimiento.

En suma, cierto es que no existe excusa válida para no adjuntar un «*título de cobro*»; y dado que en el *sub examine* estos no se aportaron, no hay lugar a librar la orden de pago reclamada.

5. De conformidad con lo expuesto, el Juzgado, resuelve:

5.1.- NEGAR el mandamiento de pago por las razones anotadas en precedencia.

5.2.- ORDENAR la devolución de los anexos de la demanda a quien la presentó, por el mismo medio por el que fueron remitidos.

5.3.- DESANOTAR el asunto y dejar constancia de su entrega.

Notifíquese,


Artemidoro Gualteros Miranda
Juez

JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL
SECRETARIA

Bogotá, D.C. **15 de enero de 2021.**

En la fecha se notifica la presente providencia por anotación en estado electrónico **n.º 002**, fijado a las **8:00 a.m.**

La secretaria:

Luz Ángela Rodríguez García

Lpds

Firmado Por:

ARTEMIDORO GUALTEROS MIRANDA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 030 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c89b9e4ac6ab219048f1f2c5918f7dc956b52558d21cd0a829ade23df95871e4**

Documento generado en 14/01/2021 10:52:25 AM